



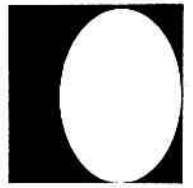
LAS DAGAS BAJO LAS CAPAS DEL IMPERIO

EDUARDO GALEANO

Entre el soborno y el chantaje, la amenaza y el garrote, oscila la política norteamericana de relaciones con América Latina. La asistencia económica a los países sur del río Bravo crece o disminuye, nace o muere, de acuerdo con criterios de estricta conveniencia política y militar y en función de la necesidad de mercados, materias primas, beneficios y libertad de operaciones de la industria norteamericana radicata dentro y fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Las presiones económicas y financieras se desencadenan, asfixiantes, sobre los países débiles. Cuando los cañonazos de dólares no tienen fuerza suficiente para que los rebeldes se arrepientan y se resignen los condenados, entonces el aire se impregna realmente de olor a pólvora. La intervención militar puede ser directa, y así los "marines" desembarcan al viejo estilo, o indirecta, y en este último caso, el más frecuente, los propios ejércitos nacionales cumplen la faena: con alguna excepción, las fuerzas armadas latinoamericanas operan, hoy día, como fuerzas de ocupación contra los países a cuya defensa, teóricamente, sirven.

El cordaje de la malla de poder del imperialismo, que oprime y paraliza a los países dependientes, está urdido por hilos múltiples y poderosos, que abarcan la economía, las finanzas, el sistema militar, la tecnología, la política, la vida sindical y la cultura. Los tres primeros aspectos constituyen el tema de este trabajo.

La caridad internacional no existe: empieza por casa, también para los Estados Unidos. La ayuda externa desempeña, en primer lugar, una función interna: la economía norteamericana se ayuda a sí misma. El insospechable Roberto Campos de Oliveira — popularmente llamado "Bobby Fields de Oliveira", zar de la economía brasileña durante la dictadura de Castelo Branco, sumo pontífice del Fondo Monetario Internacional en América Latina y asesor directo de las empresas norteamericanas en su país — opinaba, en los tiempos en que era embajador del gobierno nacionalista de Goulart, que la ayuda queda condicionada a la compra de bienes norteamericanos, y es parte de un programa de ampliación de mercados en el extranjero, para absorción de los excedentes norteamericanos y alivio de superproducción en la industria de exportación (1). Y el propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos, proclamaba a través de su órgano oficial, poco tiempo después de puesta en marcha la Alianza para el Progreso, que "empresas privadas de 44 estados norteamericanos se beneficiaron con los programas de ayuda (a América Latina), porque se crearon para ellas nuevos negocios y fuentes de trabajo en más de 235 millones de dólares en el año 1962" (2). Más recientemente, en su mensaje al Congreso, el Presidente Johnson aseguró en enero de 1968 que "más del noventa por ciento" de la ayuda externa norteamericana para el año fiscal 1969, "será para compras a efectuar en Estados Unidos, y personalmente he intensificado en forma directa los esfuerzos para incrementar este porcentaje" (3).

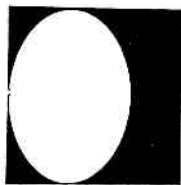


Los contratos suscritos en el marco de la Alianza para el Progreso son claros y terminantes: la ayuda consiste en la apertura de créditos para la adquisición de bienes industriales norteamericanos — los más caros del mundo — que se trasladan en barcos de banderas norteamericanas — las tarifas más altas — y que son asegurados también por compañías de los Estados Unidos. Son norteamericanos los bancos a través de los cuales se concretan las operaciones, hablan inglés los técnicos y funcionarios que controlan y dirigen la ejecución de las obras previstas en cada préstamo (“boínas verdes” de la tecnocracia, infiltrados en todas parte, que operan como un virtual gobierno secreto en cada país) y suelen ser norteamericanas las empresas beneficiadas, en América Latina, por los créditos que llegan desde el norte.

Muchas dagas brillan bajo la capa de la asistencia a los países pobres. Teodoro Moscoso, quien fuera administrador general de la Alianza para el Progreso, escribió con razón: “... puede ocurrir que los Estados Unidos necesiten el voto de un país determinado en la Organización de las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, y es posible que entonces el gobierno de ese país — siguiendo la consagrada tradición de la fría diplomacia — pida un precio a cambio” (4). Esta hipótesis, planteada en 1965, había sido realidad en numerosas ocasiones, y lo siguió siendo desde entonces: al frente de la Alianza, Moscoso ocupó una posición privilegiada para saberlo. El caso que adquirió más resonancia pública, en este sentido, ocurrió en 1962, cuando el delegado de Haití a la conferencia de Punta del Este, cambió su voto por un aeropuerto nuevo y así los Estados Unidos obtuvieron la mayoría necesaria para expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. El ex-presidente de Guatemala, Miguel Ydígoras Fuentes, ha declarado, por su parte, que tuvo que amenazar a los norteamericanos con que negaría el voto de su país a las conferencias de la Alianza para el Progreso, para que ellos cumplieran sus promesas. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno de Estados Unidos se había comprometido a comprar a Guatemala buena parte del azúcar que antes provenía de Cuba, en retribución de un favor importante: Ydígoras había cedido el territorio guatemalteco para el entrenamiento de las tropas que se lanzarían al asalto de las playas cubanas en abril de 1961 (5).

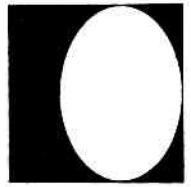
Las razones que mueven las cuerdas para abrir o cerrar la bolsa, se revelan, transparentes, en muchos casos.

Podría resultar, a primera vista, paradójico, que el Brasil, durante el gobierno nacionalista de Jango Goulart (1961-64) haya sido el país más favorecido por la Alianza para el Progreso. Pero la paradoja cesa, no bien se conoce la distribución interna de la ayuda recibida: en realidad, la Alianza no fue más que un instrumento del sabotaje imperialista contra un gobierno que se negó a entregar a la Hanna Corporation las minas de hierro más ricas del mundo



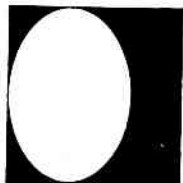
y que puso un torniquete a la hemorragia de dólares producida por las remesas de beneficios y *royalties* de las empresas extranjeras radicadas en el Brasil. El presidente Goulart no pudo evitar que los créditos de la Alianza fueran sembrados como minas explosivas en su camino. Carlos Lacerda, gobernador de Guanabara y, por entonces, líder de la extrema derecha, obtuvo 71 millones de dólares, según los primeros informes de la Alianza, para los escasos cuatro millones de habitantes de su estado (y con ellos creó hermosos jardines para turistas en los bordes de la bahía) en tanto que los veinticinco millones de habitantes del nordeste del Brasil no recibieron más que unos trece millones en total — pese a que el nordeste es una de las llagas vivas de América Latina, y allí la gente muere a los treinta años. El 19 de junio de 1964, ya triunfante el golpe de estado que instaló en el poder a Castelo Branco, Thomas Mann, subsecretario para asuntos interamericanos y brazo derecho de Johnson, declaró: “Los Estados Unidos distribuyeron entre los gobernadores eficientes de ciertos estados brasileños, la ayuda que era destinada al gobierno de Goulart, pensando financiar así la democracia; Washington no dio dinero alguno para la balanza de pagos o el presupuesto federal, porque eso podía beneficiar directamente al gobierno central” (6). La participación norteamericana en el manotazo militar que dos meses y medio antes había derribado al régimen constitucional de Goulart, fue tan descarada, que el presidente Johnson no vaciló en enviar un telegrama de buenos augurios, cuando era aún incierto el desenlace de la situación. El telegrama, remitido al presidente del Congreso, decía: “El pueblo norteamericano observó con ansiedad las dificultades políticas y económicas por las cuales ha estado atravesando su gran nación y ha admirado la resuelta voluntad de la comunidad brasileña para solucionar esas dificultades dentro de un marco de democracia constitucional y sin lucha civil” (7). Poco después del golpe, el embajador Lincoln Gordon recorría los cuarteles del Brasil expresando por todas partes su alegría. Los auto-elegidos gobernantes militares no lo defraudaron: entregaron el hierro y todo lo demás. Muy recientemente, cuatro años y medio después del ascenso de los militares brasileños al poder, el informe de una comisión parlamentaria que investigó la desnacionalización de las empresas brasileñas, indica que el 87.4% de las empresas que funcionan en Brasil no son brasileñas (8).

La Alianza es un mecanismo que acentúa el estrangulamiento económico y político de América Latina por manos norteamericanas. El préstamo más importante recibido por el actual gobierno de Guatemala, fue otorgado después de que el gobierno de Julio César Méndez Montenegro cedió a la imposición de firmar un “acuerdo honroso” con la Electric Bond and Share, que implica el pago de una abultada indemnización por una concesión que la empresa había recibido gratis y las garantías oficiales de que la Bond and Share podrá seguir fijando a su antojo los precios de la electricidad en Guatemala (9).



La administración de Lyndon Johnson había resuelto negar cualquier tipo de cooperación al gobierno de Belaúnde Terry, en el Perú, "a menos que diera las deseadas garantías de que seguiría una política indulgente hacia la International Petroleum Company. Belaúnde rehusó, y como resultado, a fines de 1965 no había recibido aún su parte en la Alianza para el Progreso" (10). Posteriormente, como se sabe, Belaúnde transó, y perdió el poder.

Muy parecidas presiones sufrió el presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro: el embajador norteamericano le advirtió que no recibiría un solo centavo para financiar el presupuesto, si no enviaba al ejército a ocupar las minas de estaño. Paz Estenssoro cayó pocos meses después, a fines de 1964, y desde Lima denunció la participación norteamericana en la conspiración militar que lo derribó: la masacre ahogó en sangre la protesta de los mineros y las empresas extranjeras se quedaron con el estaño y el hierro, el cinc y el plomo, la plata y el cadmio. El sueldo de los militares se multiplicó por tres y también se triplicaron los miembros del ejército; en cambio, los sueldos de hambre de los mineros se redujeron a la mitad y muchos miles fueron dejados cesantes (11). Durante los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia (1952-1964), los préstamos norteamericanos sirvieron claramente al propósito de dismantelar la recién nacida revolución como se desmonta, pieza por pieza, un reloj. Los Estados Unidos no proporcionaron un solo centavo para que Bolivia pudiera levantar sus propias fundiciones de estaño, de modo que el país siguió exportando sus minerales en bruto a Estados Unidos y a Inglaterra; en cambio, la ayuda dio nacimiento a una burguesía comercial parasitaria, infló la burocracia, alzó grandes edificios y tendió modernas autopistas, en un país que disputa con Haití las más altas tasas de mortalidad infantil de América Latina. No se desarrolló la producción en beneficio de las mayorías, y en cambio se hinchó artificialmente el consumo de las minorías, a través de préstamos que "el Estado no tendrá con qué pagar y se verá forzado a seguir viviendo del crédito o de la 'caridad' internacional. Esto supone no sólo que no habremos conquistado la añorada independencia económica, sino que seremos, en términos absolutos, más dependientes y atrasados que nunca, precisamente porque contamos con algunos elefantes blancos que antes no teníamos" (12). La ayuda norteamericana excluía explícitamente la posibilidad de aceptar otras ofertas de asistencia económica provenientes de los países socialistas. "Las ofertas de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia para crear una industria petroquímica, explotar y fundir el cinc de Matilde, los yacimientos de hierro del Mutún, instalar hornos de fundición de estaño y de antimonio, etc., fueron encarpetados" (13). Y, lo que es aún más grave, Bolivia quedó obligada, por decreto, a importar productos exclusivamente de Estados Unidos. En la actualidad, ya derribada la revolución que la ayuda norteamericana devoró en sus cimientos,

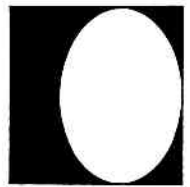


el embajador de los Estados Unidos, Douglas Henderson, asiste puntualmente a las reuniones de gabinete del gobierno del general René Barrientos (14).

Poco antes de las "elecciones" de principios de 1968, que extendieron la dictadura del general Alfredo Stroessner en el Paraguay, Stroessner visitó los Estados Unidos. "Cuando me entrevisté con el presidente Johnson — declaró — le manifesté que ya hace doce años que desempeño funciones de primer magistrado por mandato de las urnas; Johnson me contestó que eso constituía una razón más para continuar ejerciéndola el período venidero" (según cable de France Presse). No era para menos. Bajo el mandato de este carnicero, uno de los favoritos de la Alianza para el Progreso, se promulgó una ley que exonera a las empresas extranjeras del pago de derechos aduaneros y de casi todos los impuestos internos; se les asegura divisas para la repatriación de los beneficios y se le exime por cierto tiempo de la obligación legal de emplear un porcentaje de personal paraguayo.

La ayuda norteamericana ofrece, en todos los casos, indicaciones tan precisas como las de un termómetro para evaluar "el clima general de los negocios" existente en cada país. Y como se sabe, cuando los nubarrones políticos o las tormentas revolucionarias amenazan o ponen en peligro la transparencia de este cielo de los millonarios, llega el turno de las intervenciones militares. Despojada de la retórica de los discursos que le dieron clamoroso origen, la Alianza para el Progreso es hoy — a la mínima escala en que sobrevive, reducidos sus recursos a términos irrisorios — lo que Wall Street ha querido que la Alianza fuese. En febrero de 1963, un grupo de hombres de negocios encabezados por David Rockefeller envió un mensaje al presidente Kennedy en el que advertía, según la versión de los cables: "La Alianza para el Progreso puede triunfar sólo en el caso de que enfatice y aliente la iniciativa privada y su inversión, en lo local y en lo extranjero. El primer requisito es que los gobiernos, tanto como sea posible, el pueblo de Latinoamérica, sepan que los EE. UU. han cambiado su política de modo que se acentúe el mejoramiento en el clima general de los negocios como un requisito previo para el desarrollo social y la reforma. El segundo requisito concierne a un cambio de criterio para la ayuda concedida. Los EE. UU. van a concertar su programa de ayuda económica en los países que muestren la mayor inclinación a favorecer el clima de inversiones y retirar la ayuda a los otros países en que una performance satisfactoria no sea demostrada".

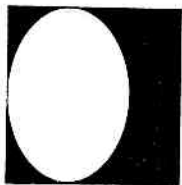
El propio texto de la ley de ayuda extranjera es categórico al disponer, en su artículo sexto, la suspensión de la asistencia al gobierno de cualquier país, cuando ese gobierno, cualquiera agencia o subdivisión gubernamental haya nacionalizado, expropiado o confiscado el control de la propiedad perteneciente a cualquier ciudadano de EE. UU. o cualquier compañía, sociedad o asociación,



cuyo patrimonio pertenezca a ciudadanos estadounidenses en proporción no inferior a la mitad. El mismo efecto suspensivo tendrá "la aplicación de cargas discriminatorias u otras exigencias" y la ayuda se reanudará sólo cuando los ciudadanos o empresas afectadas hayan recibido indemnización líquida y rápida y en dólares, equivalente al valor total de la propiedad (15). No es casual que este texto legal se refiere, explícitamente a las medidas adoptadas contra los intereses norteamericanos "al primero de enero de 1962 o en fecha posterior": el 16 de febrero de 1962, el gobernador Leonel Brizola había expropiado a la compañía de teléfonos del estado brasileño de Río Grande do Sul, subsidiaria de la International Telephone and Telegraph Corporation, y esta decisión había endurecido las relaciones entre Washington y Brasilia. La tensión fue en aumento; el vicepresidente de la IT & TC, que había aceptado la indemnización propuesta por el gobierno, perdió su cargo (16). Sólo después de la caída del régimen de Goulart, la empresa impuso finalmente su voluntad y obtuvo una indemnización muchas veces superior al monto real de sus inversiones. Por supuesto, no se dedujo de la indemnización el valor de los gigantescos fraudes cometidos por la empresa en perjuicio del estado brasileño desde su instalación en el país.

La absoluta identificación del gobierno norteamericano con la suerte de las inversiones extranjeras de las grandes corporaciones, ha signado desde siempre las relaciones entre las dos Américas. Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz, en Guatemala, expropió las tierras no cultivadas de la United Fruit Co., emitió bonos especiales para pagar a largo plazo la indemnización correspondiente. La United Fruit, que había recibido prácticamente gratis, de manos del dictador Estrada Cabrera, sus gigantescas propiedades de mar a mar, era infinitamente más rica que el propio estado guatemalteco. La fórmula del pago en bonos resultaba indispensable para poner en práctica la urgente reforma agraria. ¿De dónde sacar dólares para pagar, contante y sonante, el valor de la United Fruit atribuía a las tierras que había usurpado y que se daba el lujo de mantener ociosas, en uno de los países más pobres de América Latina? El 8 de junio de 1954, los Estados Unidos suspendieron su ayuda a Guatemala; el 16 de junio, el Presidente Eisenhower manifestó "suma preocupación" por lo que estaba ocurriendo en este pequeño país; el 18 de junio, aviadores norteamericanos piloteando aviones norteamericanos dieron comienzo al ametrallamiento y los bombardeos de las ciudades y aldeas de Guatemala; el 27 de junio, el embajador norteamericano Peurifoy anunció con cuatro horas de anticipación la renuncia del presidente Arbenz (17).

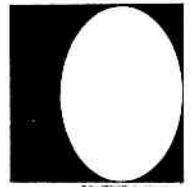
Algunos años después, iba a repetirse un proceso semejante en Cuba, con resultados muy diferentes para los Estados Unidos. En octubre de 1959, en plena efervescencia revolucionaria, Washington elevó una nota oficial a La



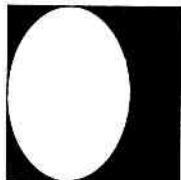
Habana interesándose por el futuro de las inversiones de capital norteamericano en Cuba; a mediados del 60, el gobierno de Fidel Castro resuelve comprar petróleo crudo a la Unión Soviética, las empresas petroleras norteamericanas e inglesas se niegan a refinarlo y Cuba las expropia. La Standard Oil de New Jersey obtenía en Cuba fabulosas ganancias por diversas vías: compraba el petróleo crudo a la Creole Petroleum, su filial en Venezuela, a los altos precios fijados por el *cartel* internacional, refinaba ese petróleo y lo distribuía. Las compañías fueron nacionalizadas sin compensación alguna: la Standard Oil perdió tres fuentes de fabulosas ganancias (18). Después vino la ruptura de relaciones, el bloqueo comercial, militar y político, los bombardeos y la frustrada invasión de Bahía de Cochinos. "De las diez compañías azucareras más grandes de Cuba, que dominaban la industria más importante de la isla, siete pertenecían a firmas norteamericanas (***) Muchos de los servicios públicos de Cuba, bancos, refinerías de petróleo e industrias extractivas, eran también propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos. Cualquier revolución social, por consiguiente, tenía que afectar necesariamente esos intereses en forma adversa" (19).

El 15 de agosto de 1968, el Presidente Johnson promulgó una ley que habla a las claras sobre los condicionamientos de la ayuda norteamericana. Según la ley, las multas que deban abonar los pesqueros norteamericanos que operan a más de doce millas de la costa de otro país, serán descontados de la ayuda. La disposición apunta contra los países latinoamericanos que han fijado de doscientas millas a sus costas; en los últimos años, las empresas pesqueras de los Estados Unidos han debido pagar considerables sumas porque han sido frecuentemente sorprendidas operando en aguas territoriales de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y México. El Parlamento peruano consideró que la ley es una amenaza que viola la soberanía del país; la cancillería del Ecuador hizo notar que "se alteran profundamente los propósitos que persigue la Alianza para el Progreso, a la que se estaría transformando, de instrumento de unión y cooperación, en instrumento de presión". En realidad, la Alianza nunca había sido otra cosa que un instrumento de presión, y esta actitud de Johnson resulta consecuente con toda la historia anterior. Este es un sistema imperialista en funcionamiento: sus leyes no están dictadas por el corazón de oro o de lata de quien gobierne los Estados Unidos, sino por las necesidades de expansión de un centro de poder cuya fortaleza se alimenta de la debilidad de la inmensa periferia sometida.

El intercambio de mercancías, las inversiones directas en el exterior y los empréstitos, arman la camisa de fuerza de la división internacional del trabajo. Los países del llamado "Tercer Mundo" intercambian entre ellos poco más del veinte por ciento de sus exportaciones, y en cambio dirigen las tres cuartas



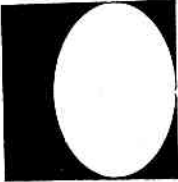
partes del total de sus ventas exteriores hacia los países imperialistas de los que son tributarios (20). Estas exportaciones consisten en productos básicos, y para muchos países un número restringido de productos, o simplemente un solo producto, proporciona la casi totalidad de sus ingresos de divisas. Venezuela vive del petróleo; Brasil, Colombia, Haití y Nicaragua, del café; la República Dominicana depende del azúcar y Bolivia del estaño, Chile del cobre y el Uruguay de la lana; las bananas proporcionan más de la mitad del ingreso a Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Ecuador. Hay en los mercados internacionales un virtual monopolio de la demanda de materias primas y de la oferta de productos industrializados; a la inversa, están dispersos los ofertantes de productos básicos y compradores de bienes terminados: los unos son fuertes, y operan congregados en torno a la potencia dominante, Estados Unidos; los otros son débiles, y operan aislados entre sí, compitiendo los oprimidos contra los oprimidos mismos. En estas circunstancias, no existe en los llamados mercados internacionales "libre juego de la oferta y de la demanda", sino dictaduras de una sobre la otra, siempre en beneficio de los países capitalistas desarrollados. Los centros de decisión donde los precios se fijan se encuentran en Washington, New York, Londres y París, en los consejos de ministros y en la bolsa. De poco o nada sirve que se hayan suscrito, con pompa y estrépito, acuerdos internacionales para proteger los precios del trigo (1949), del azúcar (1953), del estaño (1956), del aceite de oliva (1956) y del café (1962). Basta contemplar la curva descendente del valor relativo de estos productos, para comprobar que los acuerdos no han sido más que simbólicas excusas que los países fuertes han presentado a los países débiles cuando los precios de sus productos habían alcanzado niveles escandalosamente bajos. Cada vez vale menos lo que América Latina vende, y cada vez resulta más caro lo que compra. Un organismo de las Naciones Unidas informa que "si se toma como base de comparación la relación media de precios del intercambio exterior del período 1950-54, el efecto del deterioro (para América Latina) en el período 1955-60, se estima en 7.400 millones de dólares. De ello se desprende que más del sesenta por ciento del incremento anual de exportaciones, fue anulado por ese deterioro" (21). Los Estados Unidos dominan el mercado mundial del café, compran la mitad de la producción mundial: en el decenio transcurrido entre 1957 y 1966, el precio del café se redujo en más de un treinta por ciento. Con el producto de la venta de veintidos novillos, el Uruguay podía comprar un tractor Ford Major en 1954; en 1963, ya necesitaba cuarenta y dos novillos, y desde entonces la diferencia se ha acentuado mucho más. El Brasil perdió cuatro mil ochocientos cuarenta millones de dólares, como consecuencia del deterioro del intercambio, entre 1954 y 1961; entre 1930 y 1958, la Argentina sufrió, por lo mismo, pérdidas por seis mil millones de dólares.



El control de los mercados internacionales tiene también, como es obvio, proyecciones políticas. El "General Café" instaló y derribó muchos gobiernos a lo largo de la historia del Brasil. En el patético testamento que legó al pueblo brasileño el día que se partió el corazón de un balazo, el caudillo nacionalista Getulio Vargas decía, entre otras cosas: "...Vino la crisis de la producción de café, y se desvalorizó nuestro principal producto. Pensamos defender su precio y la respuesta fue una violenta presión sobre nuestra economía, al punto de vernos obligados a ceder". Apenas triunfó la revolución de 1952 en Bolivia, se desencadenaron, desde afuera, violentas presiones: Bolivia vivía y vive del estaño. Abatir el precio del producto era la más eficaz manera de impedir que pudiera respirar la revolución recién nacida y obligarla a transar. La dependencia de los mercados exteriores es el talón de Aquiles de las revoluciones nacionalistas en los países pobres: en 1951, la libra fina de estaño se cotizaba a US \$ 1,28; en 1952, a US \$ 1,20; en 1953, a US \$ 0,95; en 1954, a US \$ 0,91 (22). El valor del estaño había caído en un treinta por ciento y empezaba a producirse pérdida. A principios de 1938, el gobierno de México nacionalizó el petróleo y expropió los bienes de las empresas petroleras extranjeras, en tanto el gobierno del Uruguay establecía por ley el monopolio estatal de la refinación: el bloqueo internacional fue la respuesta del *cartel* en ambos casos. Desde la caída del gobierno de Hipólito Irigoyen en 1930, los sucesivos golpes militares que han salpicado la vida política de la Argentina, han despedido un insoportable olor a petróleo (23), y han tenido significativos puntos de contacto con las alteraciones en la relación de fuerzas dentro del *cartel* internacional. No bien se conoció, en setiembre de 1964, el resultado de las elecciones chilenas, el precio del cobre subió con alivio en los mercados internacionales: el Frente Popular, que reivindicaba su nacionalización, había sido derrotado.

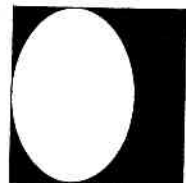
En marzo de 1955, Nelson Rockefeller, por entonces consejero especial del presidente norteamericano, había escrito con acierto: "Las industrias norteamericanas cada día dependen más y más de las materias primas del sector occidental. Estos recursos son indispensables para U.S.A. a fin de mantener su producción industrial..."

En el esquema imperialista contemporáneo, sin embargo, América Latina no cumple exclusivamente con la función de abastecedora de materias primas y productos básicos, ni es sólo mercado abierto para la producción industrializada que llega desde el norte. A esta dependencia tradicional, se agrega la explotación financiera y la imposición, por chantaje, de una política económica de puertas abiertas a la inversión extranjera que arrolla a la industria nacional latinoamericana y se apodera de ella sin mayores gastos. Es en este cuadro de cosas que debe interpretarse la victoriosa aparición del Fondo Monetario



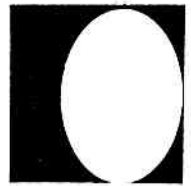
Internacional en el escenario de América Latina, hacia 1954. Ese año, llega a Chile la Misión Klein y Saks, que inaugura el reinado del FMI al sur del río Bravo: las "recomendaciones" de este organismo, creado en Estados Unidos y por los Estados Unidos controlado y orientado, alcanzarán a Bolivia (1956), Paraguay (1957), Colombia y Argentina (1958), Uruguay y Brasil (1959) y a la mayoría de los restantes países latinoamericanos. "El apoyo a los grupos exportadores, a la entrada de los capitales y productos de los países capitalistas industrializados y el abatimiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, constituyen el triángulo sociopolítico que el FMI sustenta en nuestros países", dicen dos estudiosos del tema (24). Las presiones del Fondo Monetario resultan decisivas: es el "inspector" que otorga su visto bueno para que la banca norteamericana y europea y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, proporcionen créditos a los países latinoamericanos o acepten la refinanciación de los créditos ya vencidos. El "aval" del FMI está condicionado a la aceptación y aplicación de sus "recetas". Numerosas "cartas de intenciones" han sido suscritas por los gobiernos latinoamericanos en los últimos años; en ellas, se comprometen a poner en práctica una serie de medidas que ajustan y aprietan — como dice Vivian Trías — "los torniquetes de la dependencia". La renuncia al comercio bilateral, el abandono del régimen de cambios múltiples, la contracción del crédito interno, la congelación de precios y salarios, la supresión de impuestos a las exportaciones, la "luz verde" al ingreso de los capitales extranjeros, el desaliento de la actividad estatal, la liquidación del proteccionismo industrial y la exaltación de la "libre competencia" como remedio mágico para todos los males por ella misma provocados, configuran, en rasgos generales, la fórmula del Fondo Monetario para "estabilizar" el tembladeral económico de América Latina y poner fin a la general situación de estancamiento, déficit financiero e inflación voraz. Este es un perfecto círculo vicioso, que puede ejemplificarse claramente en el caso del Uruguay: "... lo que singulariza el proceso es el hecho de que la aplicación de las medidas propuestas por el F.M.I. trajo como consecuencia un fuerte endeudamiento externo de corto plazo, principalmente con los EE. UU.; y para salir de esta situación, refinanciando deudas, y obteniendo plazos más largos, se requiere como exigencia previa e indispensable por parte de los acreedores, la adopción de las medidas económicas propuestas por el F.M.I. Es decir, su total ingerencia en la elaboración, aplicación y control de medidas que deberían competir exclusivamente al país" (25).

Las oligarquías tradicionales, cómodamente incorporadas desde siempre a la constelación de poder del imperialismo, no tienen el menor interés en promover las profundas reformas de estructura que sería menester llevar adelante para arrancar esta sufrida región del mundo de su postración y su crónica dependencia, y la burguesía nacional desarrollada a lo largo del siglo veinte no ha



demostrado mayor vigor ni mejor voluntad en este sentido. Los gobiernos latinoamericanos que expresaron políticamente a la industria nacional en ascenso en sus respectivos países, han reflejado también las contradicciones y las vacilaciones de la clase social que debía conducir ese proceso, y así cayeron sin ofrecer resistencia ante el embate de los golpes militares de extrema derecha. La impotencia y la derrota de Perón en la Argentina (1955), Goulart en el Brasil (1954) y Paz Estenssoro en Bolivia (1964) ejemplifican la traición o la debilidad de la burguesía nacional que se pliega al enemigo o falta a la cita a la hora de las grandes decisiones. A los que cayeron sin gloria habría que sumar los casos, más numerosos, de los que se entregaron sin honor: con pocas excepciones, América Latina no es capaz de ofrecer resistencia alguna a la invasión de los intereses extranjeros. Irrumpen los técnicos "internacionales", los prestamistas mesiánicos y los generosos empresarios, y hacen suyos los últimos reductos nacionales que protegían lo que quedaba de la soberanía. El victorioso asalto imperialista desmantela las últimas bases económicas de la nacionalidad.

Para las altas clases sociales latinoamericanas, la traición resulta más rentable que el patriotismo. El consumo excesivo de los ricos en Chile representó, entre 1940 y 1960, una suma de dos veces o dos veces y media mayor que el total de la inversión bruta realizada en la economía chilena en ese período (26). En un continente donde dos de cada tres personas comen menos de lo necesario o pasan hambre, los grupos sociales privilegiados dilapidan el excedente económico de nuestros países en el derroche y el lujo. Punta del Este, el balneario uruguayo cuyas doradas arenas se recuestan sobre el Atlántico, ha acaparado, en sus confortabilísimos *bugalows*, una inversión de capital mucho mayor que la de toda la industria del Uruguay. La pobreza de América Latina, queda para los latinoamericanos; la riqueza, en cambio, huye: buena parte de los fondos de las clases privilegiadas, van a parar a los bancos de Estados Unidos, Suiza, Canadá, Inglaterra. Se calcula que los activos de latinoamericanos en sus cuentas privadas en el exterior oscilan entre tres y cuatro mil millones de dólares (según Víctor Urquidí), aunque otros autores (Wendell Gordon, N. P. Schemeliov) ubican la cifra por encima de los cuatro mil millones (27). El desperdicio del excedente económico, que se malgasta o se evade por múltiples vías, proporciona los mejores pretextos para recurrir al auxilio de la banca extranjera, los capitales imperialistas y los organismos internacionales de ayuda: el desamparo y la pobreza de América Latina brindan las necesarias coartadas a la mala conciencia de las altas clases sociales gobernantes, que hipotecan ("no hay otro camino") la soberanía y el destino de sus países. Impunemente, el imperialismo "deforma toda la estructura productiva de los países sometidos; y aunque aparentemente contribuye a acelerar el desarrollo, en el fondo lo frustra, lo detiene y lo desvía" (28). Y sin embargo, "América Latina no necesita el dinero norteamericano, ni el privado ni el público;

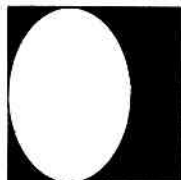


simplemente, necesita su propio dinero" (29). Son sus propios capitales, sustraídos por la explotación imperialista o restados al desarrollo por las clases dominantes, los que sobrarían para llevar adelante la lucha contra el atraso y la pobreza. Esta región del mundo, maldita por culpa de los hombres, es tan espléndida en recursos naturales que un agudo periodista británico pudo definirla así: "Latinoamérica debe haber sido el Reino de los Reinos que el Diablo mostró a Cristo para tentarlo en la montaña" (30).

Al amparo y al influjo del "libre comercio" y el "cambio libre", se ha completado en estos últimos años el proceso de *desnacionalización* de América Latina. "Libremente", los capitales extranjeros, protegidos por privilegiados acuerdos de garantías de inversiones, como en el caso del Brasil, o apoyados en las seguridades que ofrecen otros gobiernos militares y civiles, se apoderan de los bancos y las fábricas nacionales, que caen, frutas maduras, en sus manos. No se requieren grandes inversiones. A veces, alcanza un golpe de teléfono para adquirir por centavos, en la bolsa, las acciones de una empresa en crisis; a veces, no es preciso más que ejecutar las deudas mediante un *ultimátum* y el activo de la empresa queda súbitamente transferido a sus acreedores extranjeros; a veces, en fin, es el propio gobierno quien hace el obsequio, a cambio de la renovación de un crédito o la promesa de otro.

El canto de sirena del Fondo Monetario Internacional "recomienda" a los países latinoamericanos, las medidas de "liberalización" que los Estados Unidos *no* pusieron en práctica mientras impulsaron su propio desarrollo, y que aún hoy tienen muy poco que ver con el régimen rigurosamente proteccionista que los norteamericanos aplican, mediante aranceles y subidos subsidios internos, en beneficio de su propia industria. Tiene plena vigencia la respuesta del norteamericano Ulyses Grant, quien en el siglo diecinueve advirtió a los ingleses que dos siglos transcurrirían antes de que su país hubiera obtenido del proteccionismo todo lo que el proteccionismo puede ofrecer, para adoptar, entonces, el comercio libre (31).

Un manifiesto publicado en la prensa argentina a principios de noviembre de 1968, y firmado por algunos conocidos técnicos, militares y políticos, denunciaba "el acelerado proceso de transferencia de vitales resortes de la economía a manos de consorcios internacionales", y advertía que estos consorcios, "utilizando su poderosa gravitación en los organismos financieros supranacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) imponen la política monetaria, fiscal y crediticia que habrán de seguir los países que, como el nuestro, recurren al apoyo financiero exterior (32). Sumando las informaciones suministradas por este manifiesto y los datos recogidos por una revista insospechable de izquierdismo (33), puede resumirse así la situación:



—La ley de hidrocarburos sancionada por el gobierno de Onganía, abre al *cartel* petrolero internacional la explotación de los yacimientos argentinos de petróleo y gas, en perjuicio de la empresa estatal; se le otorgan, además, los mejores puestos de comercialización.

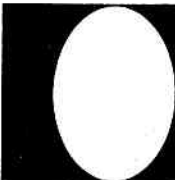
—La empresa de electricidad (SEGBA, de capital mixto estatal y privado) obtiene un nuevo préstamo del Banco Mundial con la condición de que el gobierno argentino se desprenda del paquete accionario.

—El ahorro nacional se desvía para capitalizar a empresas manejadas desde el exterior, que remiten a sus casas matrices grandes cantidades de divisas, bajo la falsa apariencia de amortización de inversiones no efectuadas y de percepción de regalías y de dividendos. La utilización del ahorro nacional en provecho extranjero, se ve muy favorecida por la transferencia de algunos poderosos bancos argentinos a bancos norteamericanos o europeos (el City Bank de New York es ahora dueño del Banco Argentino del Atlántico y del Banco de Bahía Blanca; el Morgan Guaranty Trust se apoderó del Banco Francés y Río de la Plata).

—Desde que en 1962 se produjo el derrumbamiento del mayor complejo industrial argentino (Siam Di Tella), se ha acelerado vertiginosamente la penetración de empresas extranjeras en algunos rubros que hoy dominan por completo: las fábricas de automotores y de autopiezas de capital argentino, están hoy en manos de firmas norteamericanas o europeas (Ford Motors, Dow Chemical, Borg Warner, Renault, etc.) y otro tanto ocurre, por ejemplo, con la producción de cigarrillos, en la que no queda un solo centavo de capital nacional y en la que dominan la Philip Morris Int. y la Ligget & Myers.

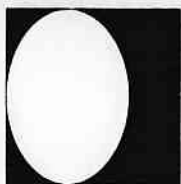
El Brasil ofrece un panorama semejante, o quizás peor, porque a la entrega de la industria nacional y de las piezas claves de la estructura comercial y bancaria, se suma la cesión de tierras de alto valor estratégico y económico en la Amazonia y el regalo de los yacimientos de hierro más ricos del mundo (hoy en manos de la Hanna Corporation). El economista brasileño Paulo Schilling estima en los siguientes porcentajes el grado de dominio actual de la economía brasileña por parte de los intereses extranjeros y fundamentalmente norteamericanos: industria automovilística, 90%; energía eléctrica, 72%; artículos de caucho, 90%; derivados del petróleo (distribución), 95%; siderurgia, 50%; fabricación de maquinarias, 70%; construcción naval, 85%; industria farmacéutica, 85%; cigarrillos, 85%; carne, 80%, etc. (34)

Un rasgo muy interesante de este proceso, que es preciso destacar y proyectar en toda su real magnitud, consiste en la penetración imperialista en la estructura bancaria de los países latinoamericanos. Las empresas extranjeras operan la desnacionalización con capitales nacionales, en considerable proporción; es el



ahorro de cada país, manejado por manos extranjeras, el que financia su entrega. Las ganancias son fabulosas, dado el escaso o ningún control que sobre las tasas de usura se ejerce al sur del río Bravo (un año después de su instalación en Asunción del Paraguay, el City Bank había recuperado ya el total de sus inversiones), pero más importante es el hecho de que la banca extranjera pasa a ocupar una posición decisiva para orientar las inversiones en provecho propio o de las empresas imperialistas a ella vinculadas. En los cinco años que van desde 1963 a 1968, el patrimonio extranjero en la banca privada del Uruguay, pasó del 9,65% al 45,98%; los depósitos, subieron del 8,51% al 42,45% y las colocaciones, del 9,26% al 44,08%. Es decir, un empuje de un quinientos por ciento que pone en manos no uruguayas las palancas financieras del país. Este fenómeno está íntimamente vinculado al progresivo endeudamiento del Uruguay frente a la banca norteamericana. Las condiciones impuestas por el National City Bank, el Bank of America, el Chase Manhattan y los demás acreedores son cada vez más duras para refinanciar los vencimientos a corto plazo a los cuales el país no puede hacer frente. Los banqueros privados de Estados Unidos tienen al Uruguay, como dice Carlos Quijano, "con la soga al cuello en el brocal del pozo: nos dejan caer y nos sacan y vuelven a dejarnos caer". Entre los precios "tácitos" que el Uruguay paga por cada refinanciación y por cada nuevo crédito, figura la transferencia o la apertura de agencias bancarias por parte del National City Bank, el visto bueno oficial para que el Bank of America devore a un banco uruguayo (el Banco del Este), etc. Pero las condiciones expresas, los precios "establecidos", no son menos graves. El último contrato firmado por el Uruguay con los bancos acreedores norteamericanos para postergar los plazos de pago de la deuda externa, determina, entre otras cosas (35):

- Que rigen los intereses corrientes del comercio y las transacciones privadas dentro del país, y no los intereses normalmente estipulados en los créditos al estado o a las instituciones estatales;
- Que esos intereses pueden subir en cualquier momento;
- Que si el Banco Central anticipa la cancelación de la deuda, con fondos no provenientes de negocios nuevos con los bancos acreedores, debe pagar una multa;
- Que el pago de la deuda no podrá ser gravado por ningún impuesto o contribución "presente o futuro";
- Que el Banco Central queda sometido al derecho comercial privado: sus obligaciones "constituyen actos comerciales y privados en lugar de actos gubernamentales o públicos", dice el contrato;
- Que el Uruguay no puede abandonar el Fondo Monetario Internacional mientras esté en vigencia este contrato o los acuerdos futuros;

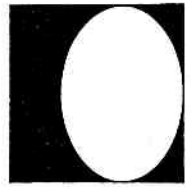


— Que en caso de desavenencia entre el Banco Central y sus acreedores, el litigio se dirimirá en los tribunales norteamericanos y de acuerdo con las leyes norteamericanas, a menos que los acreedores “consientan” otra fórmula.

Poco antes, se había dado a conocer el texto de dos nuevos convenios, firmados entre el Uruguay y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), que canaliza los empréstitos de la Alianza para el Progreso. Según declaraciones oficiales, “se concreta así una inyección económica de mil millones de pesos a la banca privada uruguaya”. Como hemos visto, esa banca privada ya es muy poco uruguaya, y los fondos que a ella se destinan no han sido regalados por los Estados Unidos, sino que provendrán de las importaciones realizadas por el Uruguay en el marco de la ley 480 de excedentes agrícolas norteamericanos. Por estos convenios, se establece el derecho de la AID de examinar la documentación relacionada con el acuerdo “hasta un período de tres años después de la terminación de su vigencia”, y se crea un nuevo organismo estatal uruguayo que, según la A.I.D., desempeñará un rol protagónico en la actual organización administrativa del Estado.

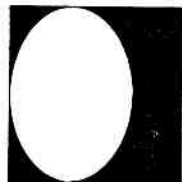
¿Qué significado puede restar a la palabra soberanía, en países invadidos por las inversiones y los empréstitos imperialistas? Dentro del caballo de Troya de la “ayuda”, llegan los tecnócratas, los “inspectores”, los ejecutivos, los “asesores” a cuyas manos pasan los reales resortes del poder económico — y, en consecuencia, político — de cada país “beneficiado”. Los empréstitos bancarios privados y los créditos de los organismos internacionales dependientes de Washington, tanto como las inversiones directas procedentes de los Estados Unidos, lejos de servir al desarrollo de los subdesarrollados, operan como válvulas de transfusión de las riquezas en dirección a los ricos, del sur paupérrimo al norte poderoso, y consolidan la base económica del imperialismo en América Latina. La hegemonía de la Roma de nuestro tiempo sobre su “coto privado de caza”, no puede ser puesta en tela de juicio sino se empieza por cuestionar esa base. Si las principales fuentes de riqueza de un país están en manos extranjeras, y si una proporción creciente de lo que ese país produce debe destinarse a satisfacer a los acreedores también extranjeros, el propio destino nacional se juega fuera de sus fronteras y a espaldas de su voluntad.

Es el mismo Fondo Monetario Internacional el que estima que América Latina pierde unos mil millones de dólares por año, en su capacidad total para importar bienes, a causa de la hemorragia de beneficios de inversiones extranjeras, servicios de donaciones, reembolsos y amortizaciones de préstamos (36). En el período 1951-61, la corriente neta de capital norteamericano que se volcó en América Latina a través de inversiones privadas directas, sumó 5.510 millones de dólares, incluidas las reinversiones de beneficios. En el mismo período, las transferencias de las ganancias desde América Latina a Estados



Unidos, alcanzaron la cifra de 9.500 millones de dólares: casi el doble (37). Si se suma el drenaje disfrazado o escondido bajo otros rubros, y el que no se registra en ninguno, la descapitalización producida por los capitales extranjeros, rompe más violentamente los ojos. Analizando las cifras de 1960, el presidente Kennedy decía: "...del mundo subdesarrollado, que tiene necesidad de capitales, hemos retirado 1.300 millones de dólares, mientras sólo le exportábamos doscientos millones en capitales de inversión..." (38)

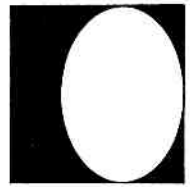
En estos últimos años, los Estados Unidos han hecho suya la bandera de la integración latinoamericana; la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) orienta sus pasos bajo la luz tutelar del presidente Johnson, y otro tanto ocurre con el llamado Mercado Común Centroamericano. Hace casi un siglo y medio, Simón Bolívar, el gran visionario de la unidad latinoamericana, el héroe traicionado por las oligarquías y derrotado por el imperialismo que nos dividió para mejor reinar, advertía en carta a su amigo Campbell: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad", y poco antes había escrito al vicepresidente colombiano: "Jamás seré de opinión que los convidemos (a los Estados Unidos) a nuestros arreglos americanos (39). Por una de esas bromas de mal gusto que se gasta la historia, el nombre de Bolívar es hoy explotado por los artífices de una integración que se está gestando contra sus principios, y que no hace más que reorganizar, en beneficio de las grandes corporaciones imperialistas, la distribución de los centros de producción y los mercados de América Latina. Johnson encabezó la reunión de presidentes de América, realizada a principios de 1967 en Punta del Este; en el acta final puede leerse que "la integración debe estar plenamente al servicio de América Latina", pero la conferencia estuvo destinada a entonar con distintas voces himnos que en distintos idiomas exaltaron el papel esencial que el capital extranjero ha de cumplir en este proceso. Esta función del capital extranjero se subraya, además, en los documentos de la ALALC, y sobre todo se subraya en los hechos. El abatimiento progresivo de las barreras aduaneras entre los países latinoamericanos — empobrecidos, incomunicados, descapitalizados y con gravísimos problemas de estructura no resueltos dentro de cada frontera — favorece y precipita la invasión de las empresas imperialistas y facilita y amplía los movimientos, a escala regional, de los monopolios que hoy estrangulan a cada país por separado. La revista norteamericana "Fortune", de gran circulación e influencia en el mundo de los negocios, lo decía en los siguientes términos en junio de 1967 (40): "Para la empresa privada de los Estados Unidos, el mercado común significa seductoras oportunidades nuevas. Además de la minería tradicional (Anaconda, Creole Petroleum) y la agricultura (United Fruit, W. R. Grace), la inversión norteamericana se ha volcado hasta ahora mayormente a las manufacturas para 'sustituir importaciones' — produciendo



para el mercado nacional bajo tarifas protectoras—. Pero los hombres de negocios de Estados Unidos están comenzando a ver en el mercado común latinoamericano las ventajas ya medidas en el Mercado Común Europeo: la oportunidad de moverse hacia la tarea más amplia, más competitiva y potencialmente más beneficiosa, de abastecer un mercado suficientemente grande como para ser económico en sus propios términos... En más de una sala de directorio, el mercado común se está convirtiendo en un serio elemento para los planes de futuro. Ford Motor do Brasil, que hace los Galaxies, piensa que tejer una linda red con la Ford Argentina, que hace los Falcons, y alcanzar economías de escala produciendo ambos automóviles para mayores mercados. Kodak, que ahora fabrica papel fotográfico en Brasil, gustaría de producir películas exportables en México y cámaras y proyectores en la Argentina. I.T.T., con sus plantas para equipos de telecomunicaciones en Argentina, Brasil, Chile y México, quiere 'racionalizar la producción, intercambiar piezas y elevar suficientemente la producción como para exportar de América Latina a otras partes del mundo', dice el Vice-Presidente Gerhard Andlinger, el ejecutivo de la compañía para América Latina. Otras corporaciones interesadas en racionalizar y extender operaciones son la General Electric, Remington Rand, Otis Elevator, Worthington, Firestone, Deere, Westinghouse, Air Brake, American Machine and Foundry".

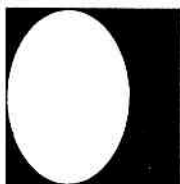
La "racionalización" de las empresas extranjeras determina que, por ejemplo, el Uruguay importará de San Pablo o Buenos Aires los automóviles que hoy compra en New York, a un precio dos veces más alto y sin cobrar los caudalosos impuestos aduaneros que hoy contribuyen a financiar su deficitario presupuesto. Y esos automóviles, introducidos al amparo de la integración latinoamericana, son producidos en Brasil o Argentina por las mismas empresas que los fabrican en Estados Unidos.

La planificación de los negocios en escala regional, no sólo sirve para aumentar los beneficios de las corporaciones, sino que además facilita el control global que, en el plano político y en el plano militar, los Estados Unidos ejercen sobre América Latina. Ya hay un "mercado común de la represión", que dio sus primeros pasos cuando los militares del Brasil y de otros países latinoamericanos, concurrieron a bendecir con su presencia, en mayo de 1965, el baño de sangre de Santo Domingo. El "nuevo orden interamericano" fue bautizado el día en que Johnson explicó en estos términos el envío de cuarenta mil "marines" a la República Dominicana: "Comprendí que no había tiempo para hablar, para consultar o para demorar... Las naciones americanas no pueden, no deben y no permitirán el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental" (41). A partir de entonces, los Estados Unidos presionaron vigorosamente a los miembros de la O.E.A. para que se instituciona-



lizara una Fuerza Interamericana Permanente, que tendrá a su cargo la intervención inmediata y multilateral de los ejércitos de América, reunidos a tales efectos en una sola fuerza colectiva y permanente, contra cualquier país donde la "subversión" amenazara las bases de seguridad del hemisferio. A pesar de que la invasión norteamericana había violado claramente la Carta de la OEA y la de las Naciones Unidas, y haciendo la vista gorda ante el hecho de que las tropas de Estados Unidos habían pisoteado suelo dominicano sin ninguna consulta previa, el Consejo de la Organización de Estados Americanos resolvió "invitar" a los países latinoamericanos a que enviaran fuerzas a la isla con el fin de "multilateralizar" una intervención ya realizada por vía unilateral. La invitación mencionó la creación de "una nueva fuerza armada interamericana"; algunos países enviaron sus soldados a Santo Domingo y así hasta la policía de tránsito de Costa Rica pudo compartir el dudoso honor de ahogar en sangre al movimiento de masas que reivindicaba la vuelta al poder del derrocado presidente Bosch, constitucionalmente electo por voto popular.

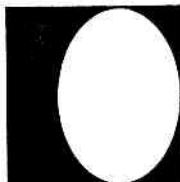
Sin embargo, las conferencias interamericanas que se celebraron posteriormente, no dieron a la luz la ansiada institucionalización de una Santa Alianza militar de carácter permanente, formada por contingentes de todos los países especialmente preparados para la intervención armada multilateral. Los sucesivos "globos de ensayo" lanzados por Estados Unidos a través del Brasil primero y más tarde por boca de otros satélites, se estrellaron contra las dificultades para obtener suficiente apoyo para que la tal Fuerza Interamericana Permanente naciera sin *forceps* peligrosos. Todo indica que Washington mantiene el asunto a la orden del día, aunque no quiere, por lo visto, apretar bruscamente el acelerador. De todos modos, en los hechos, las fuerzas armadas latinoamericanas actúan coordinadas entre sí y de acuerdo con los planes tácticos y estratégicos que diseña el Pentágono; además, la Organización de Estados Americanos sigue mereciendo el nombre de "Ministerio de Colonias" con que la bautizara Juan José Arévalo, y no hay motivos para temer que no responda, como el eco a la voz, a las demandas de los Estados Unidos frente a cada una de las próximas "Dominicanas" que el futuro, amenazante, reserva (42). El director de la oficina para Venezuela del Departamento de Estado norteamericano, John Calvin Hill, ha declarado que "si las guerrillas llegaran a constituir un peligro para Venezuela y la seguridad interamericana, Estados Unidos estaría dispuesto a considerar la solicitud de ayuda del gobierno venezolano" e intervenir en el país como antes lo hizo en Santo Domingo; por su parte, el senador Wayne Morse ha expresado que "como el hemisferio sabe, inclusive la perspectiva de un trastorno civil en Guatemala puede producir una intervención de los Estados Unidos". Y el jefe del estado mayor del ejército norteamericano, general Harold K. Johnson, ha anunciado públicamente que los Estados Unidos tienen alistada una fuerza mayor que la que



intervino en la República Dominicana, "para ponerla a disposición de las resoluciones que se tomaren en el seno de la O.E.A." En los trágicos días del desembarco en Santo Domingo, el vicepresidente Hubert Humphrey había declarado a las agencias internacionales de prensa, en el aeropuerto de Dallas, que si bien "no queremos ser policías mundiales, porque no es bueno para el mundo ni para nosotros, no se permitirá que cobren ascendencia la violencia y la subversión comunistas... Ciertamente no queremos otra Cuba castrista en este hemisferio" (43).

El profundo significado de la palabra "subversión", que tan rápidamente hace que los norteamericanos echen mano al revólver, aparece, quizás involuntariamente, revelado en estas palabras del profesor Edwin Lieuwen: "En la medida en que concierne al gobierno de los Estados Unidos, los intereses de las inversiones de sus ciudadanos están inseparablemente entrelazados con la seguridad de la nación, dado que cerca de la mitad de las inversiones en América Latina están en el petróleo y en las empresas mineras, cuyos productos son indispensables para la economía de los Estados Unidos tanto en la paz como en la guerra" (44). Haciendo a un lado la retórica liberal de sus obras anteriores, Lieuwen concluye que la mayor amenaza a los intereses norteamericanos en América Latina no proviene de la Unión Soviética, China ni Cuba, sino de las fuerzas de "la izquierda radical no democrática" en la región.

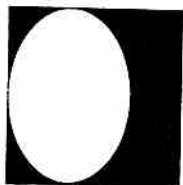
La verdad es que la intervención militar norteamericana en América Latina tiene *ya* carácter permanente y constituye la garantía *real* de la hegemonía económica y política imperialista al sur del río Bravo. Esta intervención permanente no ofrece con frecuencia los rasgos espectaculares del manotazo en Santo Domingo, pero actúa sin mayor disimulo. En febrero de 1966, el Secretario de Defensa McNamara proporcionó al Senado de los Estados Unidos numerosos ejemplos, que ilustran los resultados concretos de la "asistencia" militar de origen norteamericano en América Latina: "Las unidades venezolanas entrenadas en Estados Unidos, de sus fuerzas armadas y su policía, han encabezado una campaña gubernamental en las ciudades y en el campo. En Perú... el entrenamiento y la ayuda norteamericana al ejército y a la fuerza aérea peruana han sido decisivos en la operación anti-guerrillera. En Colombia, el entrenamiento, la ayuda y el abastecimiento estadounidense, incluyendo algunos helicópteros medianos, permitieron a las fuerzas armadas colombianas establecer el control gubernamental en las zonas rurales sublevadas. La violencia en las zonas mineras y en las ciudades de Bolivia continúa... y estamos ayudando a ese país a mejorar el entrenamiento y el equipo de sus fuerzas militares. ...Apoyamos a una pequeña fuerza contrarrevolucionaria en Guatemala con armas, vehículos, comunicaciones, equipos y entrenamiento. En el Uruguay, el estancamiento económico prolongado contribuyó a crear un clima



de intranquilidad popular... Nuestra ayuda militar en Uruguay está orientada a acrecentar las armas pequeñas, municiones, comunicaciones y equipos de transporte de sus fuerzas armadas" (45). Un cable de United Press del 26 de setiembre de 1967, informó que "el Departamento de Defensa reconoció que de tiempo en tiempo fuerzas especiales de 'boínas verdes' — cuerpo militar adiestrado en lucha antiguerrillera — han sido asignadas a países latinoamericanos. Entre los países se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Venezuela, Perú y República Dominicana. Un portavoz del Pentágono precisó que los grupos se integran con uno a seis hombres y los mayores con seis a veinte, agregando que proceden del comando norteamericano en la zona de Panamá".

Del mismo modo que, como suele ocurrir en América Latina, un embajador extranjero puede llegar a mandar más que un presidente, las misiones militares de los Estados Unidos ejercen una influencia determinante, y a veces el control directo, sobre las fuerzas armadas locales y los organismos internos de seguridad. Esta influencia y este control tienen una importancia política decisiva: en la mayoría de los países latinoamericanos, las fuerzas armadas desempeñan funciones directas o indirectas de gobierno. En los últimos años, los militares han tomado el poder en varios países por medio de golpes de estado, y en otros casos han estipulado las condiciones cuyo cumplimiento consideran indispensable para que un presidente civil llegue al gobierno o permanezca en él.

Además de los acuerdos militares de carácter colectivo, suscritos en el ámbito panamericano, los Estados Unidos han concertado, desde 1940, 152 tratados militares bilaterales con los países latinoamericanos: dieciocho con Cuba, trece con Brasil, once con Ecuador, diez con Chile y Perú, nueve con Colombia, ocho con Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, siete con Nicaragua, seis con Haití, cinco con la República Dominicana, Panamá, Paraguay, El Salvador y Venezuela, cuatro con Costa Rica y Uruguay y tres con México. El suministro de armamentos y el envío de misiones que adiestran y asesoran a las fuerzas de cada país, así como la capacitación técnica e ideológica de los militares latinoamericanos en Panamá, se cumplen dentro de lo establecido por estos tratados. Los convenios suscritos en los últimos años ilustran los cambios en la organización y en la orientación de las fuerzas armadas latinoamericanas, operados a través de los planes de "reestructuración" que el Pentágono impulsa y dirige. Ya no es la defensa de las fronteras nacionales, la misión esencial de las fuerzas armadas, sino la represión de la agitación interna. Los ejércitos latinoamericanos, nacidos de las "montoneras" que habían roto lanzas contra el poder extranjero en los tiempos de las guerras de independencia, reniegan así de su origen y de su naturaleza popular y se convierten en el brazo armado de la oligarquía

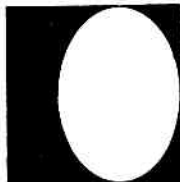


y en un instrumento del dominio imperialista. Esta es, al menos, la misión que el Pentágono les adjudica, y que han sabido cumplir al pie de la letra los generales que, desde 1964 en adelante, han tomado el poder en Brasil, Bolivia y Argentina para ejecutar desde el gobierno una política de traición a los intereses nacionales.

Sin embargo, cada ejército contiene y refleja las contradicciones de la sociedad que integra, y aunque las fuerzas armadas latinoamericanas sean aceitadas y pulidas por manos extranjeras como meras piezas del engranaje de poder imperialista, reservan aún sorpresas desagradables a sus mentores extranjeros. El golpe de estado que derribó al presidente del Perú, Belaúnde Terry, abrió paso a un gobierno militar de signo nacionalista, que sorpresivamente abatió la tradicional omnipotencia de la International Petroleum Company y la Cerro de Pasco Corporation y esto ocurrió inmediatamente después de la octava conferencia de ejércitos americanos, desarrollada en Río de Janeiro a fines de setiembre de 1968.

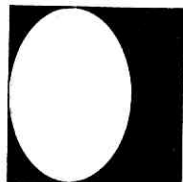
No menos sorpresiva había resultado, en 1965, la actitud del coronel Francisco Caamaño, quien, junto con otros militares dominicanos, había encabezado la revuelta popular contra una dictadura apoyada a sangre y fuego desde los Estados Unidos. Y al fin y al cabo, los dos jefes guerrilleros más importantes de Guatemala, el extinto Luis Augusto Turcios y Yon Sosa, eran militares de carrera adiestrados para la lucha antiguerrillera en Fort Benning y Fort Gulick respectivamente. En todos los ejércitos latinoamericanos hay oficiales que se resisten a aceptar el papel de carceleros de sus pueblos, que les adjudica el Imperio, y en países como Brasil y Argentina no es posible borrar de un plumazo el recuerdo de la misión esencial cumplida en tiempos pasados por las fuerzas armadas en el desarrollo económico y la defensa de la soberanía.

El General William Westmoreland presidió la citada reunión de Río de Janeiro; al mismo tiempo que daba a conocer las experiencias de la lucha contrarrevolucionaria en Vietnam, se anunció la llegada de un contingente de "boínas verdes" a la provincia argentina de Tucumán, y muy poco después se denunció la existencia de una base norteamericana en Mendoza. El gran derrotado del sudeste asiático, pudo esbozar una olímpica sonrisa mientras la delegación boliviana daba cuenta de sus victorias frente a la guerrilla del Che Guevara: todos sabían en Río que las operaciones llevadas a cabo en las selvas de Bolivia habían sido encabezadas por el mayor Shelton y los demás especialistas norteamericanos. Todos sabían, también, que las resoluciones adoptadas acerca del intercambio de informaciones, el canje de oficiales y la divulgación de experiencias, eran el fruto de los esfuerzos norteamericanos por integrar a las fuerzas armadas latinoamericanas en un organismo común capaz de ofrecer la necesaria contrapartida militar a la integración económica que los monopolios

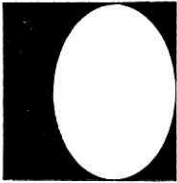


norteamericanos están conduciendo en la región. Westmoreland no escatimó críticas al actual sistema militar interamericano, al que reprochó lentitud, inoperancia y "falta de autoridad para actuar por cuenta propia". La lucha contra la revolución latinoamericana en ascenso, y la discusión en torno a la situación política continental, constituyeron el eje de la conferencia: desde distintos ángulos se replanteó la necesidad de hacer de todos los ejércitos, un solo ejército, dócil y eficaz, y la retórica de los discursos no ocultó la intención de convertir a América Latina en una inmensa base extranjera.

Casi simultáneamente, el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, hasta hace poco secretario de defensa de los Estados Unidos, pronunció un explosivo discurso en la asamblea anual del organismo. McNamara anunció que en lo sucesivo sólo recibirán créditos del Banco Mundial los países que apliquen los planes norteamericanos de control de la natalidad en el Tercer Mundo, y declaró además que la prioridad en los créditos será para la producción agropecuaria y no para la producción industrial. "No se trata de suprimir a los comensales, sino de multiplicar el pan", había dicho con razón, el Papa Paulo VI, refiriéndose al tremendo crecimiento demográfico de las regiones pobres del mundo. El proyecto imperialista explicitado por McNamara y ya puesto en práctica, desde tiempo atrás, en América Latina, en la supresión de los latinoamericanos por nacer y en la obstrucción de las vías para el desarrollo independiente de sus riquezas. El argentino Arturo Jauretche había advertido que cada latinoamericano que no nace es un guerrillero menos: la planificación de la represión armada en escala continental, resulta simétrica a la consolidación del subdesarrollo económico y al anticipado asesinato de las generaciones por venir: la conferencia de los ejércitos en Río de Janeiro y la reunión del Banco Mundial en Washington resultan así, complementarias. Certeramente señaló Vivian Trías que parecía una aviesa jugada del destino: Westmoreland y McNamara son los dos grandes derrotados de la guerra del Vietnam.



- (1) "O Estado de Sao Paulo", 24 de enero, 1963. La respuesta del embajador norteamericano Lincoln Gordon se publicó en el mismo diario, el 30 de enero de 1963.
- (2) "International Commerce", 4 de febrero, 1963, vol. 69, N° 5.
- (3) "Wall Street Journal", 31 de enero, 1968.
- (4) Revista "Panoramas", Centro de Estudios y Documentación Sociales, México, noviembre-diciembre 1965.
- (5) Anteriormente, cuenta Ydígoras, la C.I.A. le había advertido que su gobierno no recibiría un solo centavo de ayuda norteamericana si él no saldaba la deuda contraída por el coronel Castillo Armas, quien había recibido fondos de la C.I.A. para apoderarse de Guatemala, en 1954, en nombre de la sacrosanta lucha contra el comunismo internacional. Reportaje por Georgie Anne Geyer, "The Miami Herald", diciembre 24, 1966.
- (6) Declaración ante la sub-comisión de la Cámara de Representantes. Citado por Nelson Werneck Sodré, "Historia militar do Brasil", editora Civilizacao Brasileira, Río de Janeiro, 1965.
- (7) Telegrama de Lyndon Johnson a Ranieri Mazzilli, 2 de abril de 1964. Versión de Associated Press.
- (8) "Diario da Noite", San Pablo, 15 de octubre de 1968.
- (9) Eduardo Galeano, "Guatemala, una revoluzione in lingua maya", Laterza, 1968.
- (10) Al fin se hizo la voluntad de la I.P.C., filial de la Standard Oil New Jersey. En octubre de 1968, estalló el escándalo del petróleo: Belaúnde, que había obedecido para sobrevivir, fue desalojado del poder por un golpe militar nacionalista. "La transcripción entrecomillada proviene de Frederick B. Pike, "The modern history of Perú", Praeger, 1968.
- (11) Mariano Baptista Gumucio y otros, "Guerrilleros y generales sobre Bolivia", Jorge Alvarez editor, Buenos Aires, 1968.
- (12) Amado Canelas, "Radiografía de la Alianza para el atraso", Librería Altiplano, La Paz, 1963.
- (13) Mariano Baptista Gumucio, op. cit.
- (14) John Gunther, "Inside South America", Harper and Row, 1967.
- (15) Foreign Aid Act. Cuando "O Semanario", periódico nacionalista de Río de Janeiro, reprodujo su texto en julio de 1963, advirtió con razón, que estas disposiciones legales norteamericanas apuntaban contra las tendencias nacionalistas del régimen de Goulart en Brasil. La llamada "Enmienda Hickenlooper" sería luego esgrima en numerosos casos.
- (16) Edouard Bailby, "Brésil, pays clef du Tiers Monde", Calmann-Lévy, París, 1964.
- (17) Juan José Arévalo, "Guatemala, la Democracia y el Imperio", ediciones "Marcha", Montevideo, 1954.
- (18) Paul Baran y Paul Sweezy, "Monopoly capital", Monthly Review Press, 1966.
- (19) James P. Warburg, "Disarmament: The challenge of the Nineteen Sixties", Doubleday, 1961.
- (20) Pierre Jalée, "El saqueo del Tercer Mundo", Ruedo Ibérico, París, 1966.
- (21) CEPAL, "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", Mar del Plata, mayo 1963.
- (22) Guillermo Bedregal, "Monopolios contra países pobres: la crisis mundial del estaño", Siglo XXI, México, 1965.
- (23) Eduardo Galeano, "La batalla del petróleo", "Marcha", Montevideo, diciembre 1961.

- 
- (24) Alberto Couriel y Samuel Lichtensztejn, "El Fondo Monetario Internacional y la crisis económica nacional", FCU, Montevideo, 1967.
- (25) Ibid.
- (26) Datos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, "Un ensayo de medición del excedente económico potencial", Santiago de Chile, 1964.
- (27) Citados por Alonso Aguilar, "Teoría y política del desarrollo latinoamericano, México, 1967.
- (28) Alonso Aguilar, op. cit.
- (29) John Gerassi, "The great fear", Mac Millan, 1963.
- (30) Paul Johnson, en el "New Statesman", 17 de setiembre, 1960.
- (31) "...Durante siglos Inglaterra se ha apoyado en el proteccionismo y lo ha llevado hasta sus extremos, y ha obtenido resultados satisfactorios de él. No cabe duda de que es a este sistema que debe su poder presente. Al cabo de dos siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el comercio libre porque piensa que el proteccionismo ya no puede ofrecerle nada. Muy bien; entonces, caballeros, mi conocimiento de mi país me conduce a creer que de aquí a dos siglos, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que él puede ofrecer, adoptará también el libre comercio". Transcrito por Andre Gunder Frank, "Capitalism and underdevelopment in Latin America", Monthly Review Press, 1967.
- (32) Manifiesto del Movimiento en Defensa del Patrimonio Nacional, publicado en "La Razón" de Buenos Aires.
- (33) "Primera plana", N° 297, setiembre de 1968.
- (34) Paulo Schilling, "Brasil para extranjeros", Diálogo, Montevideo, 1967.
- (35) Publicado en "Marcha", Montevideo, el 20 de setiembre de 1968; Vivian Trías le dedicó un extenso comentario en el periódico "Izquierda", la semana siguiente.
- (36) Citado por CEPAL, "El financiamiento externo de América Latina", 1963.
- (37) Datos tomados de cuadros de CEPAL, ibid.
- (38) Discurso ante el congreso de la AFL-CIO en Miami, 8 de diciembre de 1961.
- (39) "Cartas del Libertador", recopilación de Vicente Lecuna, Caracas, 1929.
- (40) "A Latin American Common Market makes common sense for U.S. businessmen too".
- (41) Discurso de Lyndon Johnson, 2 de mayo de 1965.
- (42) Mario Amadeo, actual embajador del régimen del general Onganía, ilustró así la obsecuencia de la OEA, en los tiempos en que pensaba todavía con cabeza argentina: "Cuando los Estados Unidos mantenían la neutralidad en la segunda guerra mundial, la reunión de consulta de Panamá proclamó la neutralidad más estricta'. Cuando los Estados Unidos comenzaron a aproximarse a la guerra, la reunión de consulta de La Habana declaró la solidaridad ante la amenaza exterior. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, la reunión de Río recomendó declarar la guerra. Cuando los Estados Unidos empezaron a tener dificultades con Rusia, la Conferencia de Bogotá señaló el peligro de la infiltración comunista. Y cuando los Estados Unidos vieron próximo el conflicto, la reunión de consulta de Washington adoptó las medidas preliminares para la participación de todo el Continente" (en el libro "Por una convivencia internacional. Bases para una comunidad hispánica de naciones", ed. Madrid, 1956).
- (43) Cable de Associated Press, 17 de mayo de 1965.
- (44) Edwin Lieuwen, "The United States and the challenge to security in Latin America", Ohio State University Press, 1966.
- (45) Declaraciones ante una sesión conjunta de dos comisiones del Senado norteamericano. Citado por James Petras, en un artículo publicado en "Ramparts" y en "Marcha" (N° 1338).

